

suncion favorable, pero no de justificante seguro é indudable, resultando de esto mismo que el Fisco de la Federacion está intimamente interesado en el esclarecimiento de ese asunto. De conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, y con fundamento del artículo 97 fraccion 3ª de la Constitucion general de la República, se decreta: que el Juez de Distrito de Veracruz es el competente para seguir conociendo del juicio que sobre importacion fraudulenta de un bulto de ropa, fué aprehendido á D. Alfredo Bastide en el pueblo de Huatusco.

Devuélvase las actuaciones al referido Juez de Distrito de Veracruz, con copia certificada de esta sentencia; remítase copia igual al de 1ª instancia de Huatusco para su conocimiento. Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Son copias. México, Mayo 21 de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial segundo.

COMPETENCIA

Suscitada entre el Juez de Distrito de San Luis Potosí y el 2º de Letras del mismo Estado, para conocer de la multa impuesta al concurso del finado D. Francisco H. Cabrera.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice: que se ha suscitado competencia entre el Juez 2º de Letras de San Luis Potosí, y el de Distrito del mismo Estado para conocer de una multa impuesta al concurso del finado D. Francisco Cabrera, y cuyo Síndico lo es D. Anastasio Alcocer. El

TOMO VI.—PARTE II.

hecho que dió origen á este conflicto, es el siguiente:

Con fecha veinte de Mayo del año próximo pasado la Administracion principal de rentas del papel sellado de dicha Ciudad, remitió un oficio al Juez de Distrito mencionado, manifestándole que le constaba de vista que los libros correspondientes al expresado concurso existian sin el sello correspondiente; que habiendo pedido esos libros al Síndico del concurso, este se resistía á entregarlos, alegando: que estaban constituidos en depósito, de orden del Juez, ante el cual se ventilaba el negocio.

Con este motivo el Juzgado de Distrito se constituyó en la casa de D. Anastasio Alcocer, Síndico del concurso de Cabrera, y tomó nota de los siguientes libros “Mayor y Diario” relativos á los años mil ochocientos sesenta y seis á mil ochocientos setenta y uno, seis copiadore de cartas de mil ochocientos sesenta y cinco á ochocientos sesenta y uno, un “borrador” de mil ochocientos sesenta y tres á mil ochocientos sesenta y cuatro, otro id, que comenzado en mil ochocientos sesenta y nueve, alcanza al diez y seis de Febrero de mil ochocientos setenta y uno, otro intitulado Maquilas que principiado en tres de Marzo de mil ochocientos sesenta, concluye en el diez y nueve de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco, otro de caja de mil ochocientos sesenta y seis á mil ochocientos sesenta y uno, otro segundo borrador de pago de mil ochocientos sesenta y seis á Febrero de mil ochocientos setenta y uno, otro auxiliar de sesenta y dos á sesenta y cinco, otro “Deudores diversos,” que dando principio en primero de Enero de mil ochocientos cuarenta y cinco, concluye en Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno. Todos estos libros segun se asentó en la diligencia respectiva, carecian de la constancia de haberse satisfecho el sello del papel sellado, mandándose levantar la acta correspondiente.

El Juez de Distrito dispuso luego remitiera copia de esa acta al Administrador de

la renta para que procediera á la ejecución de la multa, y este funcionario la hizo extensiva, tanto al Juez que conocia del concurso de Cabrera como al escribano que actuaba esos autos. El Juzgado se resistió y se ha promovido la presente competencia.

Como se vé pues, por el extracto que se acaba de hacer, el asunto es enteramente análogo al que esa Suprema Corte falló en veintitres de Octubre del año próximo pasado, referente á la competencia por el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital y el 2º de lo civil de la misma, para conocer de la multa impuesta á D. Julio Robreán, por infracción de la ley de papel sellado.

Las razones que esa 1ª Sala tuvo presentes en esa vez, para declarar de conformidad con lo pedido por el que suscribe, son las mismas que este Ministerio invoca ahora y alega, para que se falle de igual modo. Esas razones fueron en breve las siguientes.

Que conforme á la fracción 2ª artículo 97 de la Constitución, todos los negocios en que está interesada la Hacienda pública son del exclusivo resorte de los tribunales federales; que los artículos 55 y 61 de la ley de catorce de Febrero de mil ochocientos cincuenta y seis, así como la circular de once de Abril de mil ochocientos setenta y uno, son terminantes en este punto y aun la misma ley reglamentaria de la facultad económico-coactiva está de absoluto acuerdo con las disposiciones anteriores, dando todo esto por resultado, que la presente competencia se ha sostenido contra las expresadas leyes, y el Juzgado que la sostuvo, comprendido en lo que impone pena á los que así lo promueven y sostienen, y en cuya aplicación era de justicia que hoy debe hacerla esa 1ª Sala. Reasumiendo en proposiciones, el Fiscal concluye:

Primera: Se declara que el Juez de Distrito de San Luis Potosí, es el competente para seguir conociendo de los autos sobre imposición y extracción de la multa que por infracción de la ley de papel sellado, se ha impuesto al concurso del finado D. Francis-

co C. Cabrera.

Segunda: Es de condenarse en las costas y demás penas en que ha incurrido el Juzgado 2º de Letras de San Luis Potosí, por haber sostenido igualmente su jurisdicción en este negocio.

México, Enero treinta y uno de mil ochocientos setenta y cuatro.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril treinta de mil ochocientos setenta y cuatro.---Vista la competencia suscitada entre el Juez de Distrito de San Luis Potosí y el 2º de Letras del mismo Estado, para conocer de la multa impuesta al concurso del finado D. Francisco H. Cabrera. Vistos los informes de los jueces competidores; lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal; oído el informe que al tiempo de la vista prolijo el C. Lic. Manuel Lombardo, como patrono de Doña Ana Rivas de Benavente, acreedora al referido concurso, y teniendo presente cuanto de mas convino.

Considerando que en cuanto al concurso, en sí mismo no puede darse que sean competentes los tribunales federales, porque en los créditos que en él figuran ya como activos, ya como pasivos, el Erario Nacional no está interesado.

Que si el interés que este pudiera tener se deduce de la multa que el Juez 2º de Letras de San Luis Potosí ha impuesto al referido concurso, con motivo de que D. Francisco Cabrera no llevó los libros de su negociación en el papel sellado que correspondía y cuya multa se trata de hacer efectiva, en virtud de la facultad económico-coactiva, hay que considerar que tanto por la ley de veinte de Enero de mil ochocientos treinta y siete, que reglamentó dicha facultad, como por las demás que puedan tenerse como sus concordantes, á saber, la de Noviembre de mil ochocientos treinta y ocho y

su reglamento de treinta y uno de Diciembre del mismo año, la intervencion de la Justicia federal solo tiene lugar cuando hay contencion de causas, y mientras esto no sea, los tribunales de la Federacion no pueden avocarse el conocimiento del negocio.

Que aun en el caso de contienda sobre el título de la multa, en virtud de las expresadas leyes, toda autoridad y aun todo empleado está en el deber de hacer efectiva la multa que se haya impuesto hasta dejar asegurados los intereses de la Hacienda pública, y solo despues de esto, será cuando ya pueda la autoridad judicial de la Federacion, conocer de esa multa en el juicio respectivo, y con audiencia del Promotor fiscal, como legítimo representante del Fisco.

Que en lo que referencia al concurso de Cabrera, no consta de autos que exista la contienda ó contencion que las leyes citadas requieren como condicion precisa para que el Juez federal se avoque el conocimiento del asunto en cuestion; por estos fundamentos, y demas en que se apoya el Juez 2º de Letras de San Luis Potosí, se declara:

Primero: Que este Juez es el competente para seguir conociendo de la multa que impuso al concurso de D. Francisco H. Cabrera, por no haber llevado este los libros de su negociacion en el papel sellado que correspondia.

Segundo: No hay condenacion en costas.

Tercero: Remítanse las actuaciones al Juez 2º de Letras de San Luis Potosí, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al de Distrito del mismo Estado para su conocimiento. Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. Juan J. de la Garza. — Simon Guzman. — M. Zavala. — Enrique Lanza*, secretario.

Son copias. México, Mayo veintiuno de

mil ochocientos setenta y cuatro.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por D. Ramon de la Portilla, contra el Gefe político de Irapuato, que lo redujo á prision.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por D. Ramon de la Portilla, su estado supuesto que es el de alegar, dice: que durante el término probatorio no se han rendido ningunas pruebas, por cuya causa los únicos datos para resolver si debe concederse el amparo de la Justicia de la Unión, son el escrito de queja y los informes de la autoridad responsable.

El quejoso fué aprehendido por el C. Gefe político de Irapuato, en virtud de un parte telegráfico de la autoridad política de Abasolo, y trascurrió el término legal de detension sin que se hubiera dictado el auto de formal prision como está comprobado con la partida de entrada á la cárcel de Irapuato, y la declaracion del alcaide de la misma prision. Tales procedimientos en sentir del quejoso, violan en su persona las garantías individuales consignadas en los arts. 16, 17 y 19 de la Constitucion federal.

El C. Gefe político de Irapuato á su informe con justificacion, acompañó originales dos telégramas de la autoridad política de Abasolo, en los cuales se solicitaba la aprehension del quejoso, y se le avisaba que pronto recibiria un exhorto del C. Juez 4º de Letras de San Luis Potosí, el cual asegura fué recibido, y segun se dice en el informe, la causa de la aprehension era el delito de estafa.

Los dos telégramas que obran en las actuaciones, no son bastantes para justificar